



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III

CAF 36239/2012/CA1; VENINI CARLOS ALVARO c/ EN-M°  
ECONOMIA-AFIP-PERIDO FISCAL 2009 s/ DIRECCION GENERAL  
IMPOSITIVA

PDP

En la ciudad de Buenos Aires, a los        días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para resolver el recurso interpuesto contra la sentencia de primera instancia dictada en los autos “*Venini, Carlos Álvaro c/ EN-M° Economía -AFIP-período fiscal 2009 s/ Dirección General Impositiva*”, Causa CAF 36239/2012/CA1, planteado al efecto como tema a decidir si se ajusta a derecho la sentencia apelada, el Señor Juez de Cámara, Doctor Sergio Gustavo Fernández dice:

I.- Que el Sr. juez de primera instancia rechazó la demanda interpuesta por el contribuyente Carlos Álvaro Venini –en lo sucesivo, “Sr. Venini”– contra el Estado Nacional-Administración Federal de Ingresos Públicos, con costas.

En el presente proceso el actor impugnó la resolución del 11/5/12 –que a su vez ratificó la del 25/8/10–, mediante la cual el fisco nacional había rechazado la declaración jurada –“DDJJ”– rectificativa N° 1 del impuesto a las ganancias –“IG”–, correspondiente al período fiscal 2009.

En su pronunciamiento, el magistrado interviniente estimó que la cuestión se relacionaba con la aplicación del artículo 13 de la ley 11.683 –texto anterior a su reforma–, a cuyo tenor únicamente los errores de cálculos contenidos en las propias declaraciones juradas habilitan la disminución del impuesto determinado y expuso que el error debe ser de fácil observancia y constatación, sin necesidad de recurrir a la consulta de documentación complementaria y/o de activar mecanismos de fiscalización, a fin de determinar la viabilidad de la modificación pretendida.

Sostuvo que el contribuyente puede reclamar los montos ingresados en exceso, a través de la vía prevista en el artículo 81 de la misma ley invocada y aseveró que en el caso de autos el actor pretendió modificar la DDJJ original, incrementando las deducciones generales a la suma de \$26.632,30 y las deducciones personales a la de \$72.000, lo cual implicaba que la ganancia neta sujeta a impuesto se redujera a \$384.036,53.

Finalmente concluyó que resultaba imposible que el caso se subsumiera en las previsiones del artículo 13 citado, ya que no se trató de una



equivocación en los cálculos contenidos en la declaración, sino de asuntos que concernieron a la obligación tributaria.

**II.** Que contra dicha sentencia se alza la parte actora, interponiendo el recurso de apelación a fs. 153, concedido a fs. 154.

La expresión de agravios fue presentada el 10/6/24 [8:42 hs.] y contestada por el fisco nacional el 28/6/24 [14:48 hs.].

En su memorial, el actor cuestiona la interpretación del juez de grado, en cuanto sostuvo que el caso no se subsumió en los términos del artículo 13 de la ley de rito fiscal.

Niega que pretenda constatar la viabilidad de las deducciones en cuestión y de comprobar las retenciones sufridas, sino sólo rectificar el error material e involuntario en el cual incurrió al confeccionar la DDJJ original del IG-2009.

Señala que se desempeñó como empleado en relación de dependencia durante más de 25 años, razón por la cual sus empleadores actuaron como agentes de retención del IG, cabiéndole a él únicamente el deber de presentar el formulario F 711, copiando los datos insertos por el empleador en el formulario F 649.

Expone que, contrariamente a lo resuelto, erróneamente consignó deducciones generales por \$22.047,72.-, en lugar de \$26.632,31.-, a causa de haber copiado indebidamente el valor del formulario F 649 del periodo fiscal 2008 que había realizado su empleador. Menciona que lo mismo sucedió con las deducciones personales computables, pues insertó el valor \$0.- cuando debió ser \$72.200.-, tal como lo hizo el empleador en el mismo formulario F. 649.

Expresa que estos dos yerros obedecieron a errores de cálculo, lo cual derivó en declarar un saldo a favor del organismo recaudador de \$7.400,24.-, cuando debió ser \$0.-.

Solicita que se revoque la sentencia apelada, que se tenga por presentada y admisible la DDJJ rectificativa presentada el 13/8/10 y que se declare que nada adeuda a la AFIP, con costas.

**III.** Previo a todo, es importante recordar que no me encuentro obligado a seguir a los apelantes en todas y cada una de las cuestiones y





## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III

CAF 36239/2012/CA1; VENINI CARLOS ALVARO c/ EN-Mº ECONOMIA-AFIP-PERODO FISCAL 2009 s/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

argumentaciones propuestas a consideración de esta Alzada, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 278:271, 291:390, 297:140; 301:970; esta Sala, “ACIJ c/EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/08; “MULTICANAL S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/amparo ley 16.986”, del 21/5/09; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/10; “CPACF- INC MED (2-III-11) c/ BCRA- Comunicación “A” 5147 y otro s/proceso de conocimiento”, del 18/4/11; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/11, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/14, “Laham, Alberto Elías c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/15, “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN M Interior OPyV DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/18, entre otros; esta Sala –en su actual integración–, [causa CAF 49.932/2015/CA2, “D’Alessandro, Jorge Héctor \(TF 33405-I\) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”](#), del 2/5/24).

IV. Que de la compulsa de las piezas que tengo a la vista –lo cual abarca tanto la sostenida en formato papel, incluyendo a las actuaciones administrativas, como digital: sistema *Lex100*–, extraigo que no se encuentran controvertidos los siguientes hechos:

- Que el Sr. Venini, en lo que atañe año período fiscal 2009, se encontró alcanzado por el IG y, en atención a su carácter de empleado en relación de dependencia de la firma BGH SA, le fue retenido el impuesto correspondiente a las rentas de la cuarta categoría, acreditado ello en el formulario F 649 que obra a fs. 6/7.

- Que en la DDJJ-IG-2009 original –presentada el 21/4/10– el actor consignó “Deducciones generales” por valor de \$22.047,72.-; “Deducciones personales computables” por valor de \$0.- y “Saldo a favor de AFIP” por valor de \$7.400,24.- (fs. 8).

En este mismo orden de exposición, al presentar la DDJJ-IG-2009 rectificativa N° 1 –el 9/8/10–, sustituyó los dos primeros importes



descriptos por \$26.632,31.- y \$72.200.-, respectivamente, lo cual derivó en el “Saldo” del impuesto, pasando a ser \$0.- (actuación administrativa N° 10883-188-2011, fs. 3).

- Que de los formularios F 649 confeccionados por la firma BGH SA se desprende lo siguiente: el total del “Rubro 2” –deducciones y desgravaciones– fue de \$22.047,22.- en el período fiscal 2008 y de \$26.632,31.- en el período fiscal 2009; luego, el total del “Rubro 6” –deducción especial, ganancia no imponible y cargas de familia– fue de \$2.653,60.- en 2008 y de \$72.200.- en 2009.

Dentro de este cotejo, debe incluirse el dictamen pericial contable que luce a fs. 121/vta., en el cual el experto –en lo medular– dio cuenta de los componentes fácticos y objetivos recientemente descriptos, tal como lo apuntó el fisco nacional en la impugnación de fs. 124/vta.

V. Que a la luz de lo reseñado, observo que las posiciones encontradas de las partes se concentra en el análisis de la conducta asumida por el Sr. Venini al presentar la DDJJ rectificativa, de conformidad con lo prescripto en el artículo 13 de la ley 11.683 entonces vigente.

Dicho precepto –antes de la reforma introducida por la ley 27.430, BO 27/12/17–, en su parte pertinente disponía lo que se transcribe a continuación: *“La declaración jurada está sujeta a verificación administrativa y, sin perjuicio del tributo que en definitiva liquide o determine la Administración Federal de Ingresos Públicos hace responsable al declarante por el gravamen que en ella se base o resulte, cuyo monto no podrá reducir por declaraciones posteriores, salvo en los casos de errores de cálculo cometidos en la declaración misma”* (subrayado aquí agregado).

Concretamente, tal como lo reseñé, el actor sostiene que sólo existió un error de cálculo en la DDJJ original, ocasionado al “copiar” incorrectamente los valores insertos en el formulario F 649 del periodo fiscal 2009.

A ello se adiciona lo que había expuesto en su escrito de demanda (fs. 1/3), en cuanto a que se trataría de un “error material involuntario”, que estribó en copiar en la DDJJ-IG-2009 los guarismos





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III

CAF 36239/2012/CA1; VENINI CARLOS ALVARO c/ EN-M°  
ECONOMIA-AFIP-PERIODO FISCAL 2009 s/ DIRECCION GENERAL  
IMPOSITIVA

insertos en el formulario F 649 del año 2008, en lugar de hacerlo con el  
formulario F 649 del 2009.

**VI.** Que a fin de discernir este pleito, debo señalar que la  
cuestión se reduce a determinar si el error que el Sr. Venini admite haber  
incurrido se halla alcanzado por la excepción que el legislador previó en el  
mencionado artículo 13.

Estimo que ello es así, toda vez que la lectura e interpretación  
de la expresión “errores de cálculo” no ha de restringirse a los yerros  
aritméticos –de sumas, restas, porcentuales, etc.–, sino abarcando también a  
los valores que los preceden y sustentan.

Es que, según colijo, mal podría limitarse el alcance de aquella  
expresión a las cuentas en sí mismas, excluyendo a sus valores, *so pena* de  
transgredir su sentido racional y lógico.

Al respecto, cabe recordar que no siempre es un método  
recomendable atenerse estrictamente a las palabras de la norma, ya que el  
espíritu que informa las disposiciones es lo que debe determinarse en procura  
de su aplicación racional, que a la vez elimine el riesgo de un formalismo  
paralizante, y que permita a los jueces superar las posibles imperfecciones  
técnicas de la instrumentación legal y dar pleno efecto a la intención del  
legislador (cfr. CSJN, Fallos: 319:2678).

A mayor abundamiento, remarco que esta Cámara –a través de  
la Sala IV y con el voto preopinante de mi distinguido colega que  
actualmente integra esta Sala, Dr. Jorge E. Morán– se ha pronunciado en un  
planteo que guarda sustancial analogía con el presente.

Así pues, en la [Causa N° 34814/2017, in re “Toledo, Gustavo  
Damián c/AFIP s/proceso de conocimiento](#)”, del 17/6/21 sostuvo que: “...  
*por error de cálculo debe entenderse aquel en que se incurre al realizar las  
operaciones aritméticas necesarias para cubrir la declaración jurada o bien  
al tomar los datos numéricos que sirven de base a aquellas operaciones*” (v.  
Considerando 6°), concluyendo luego que ambos supuestos encuadran dentro  
de la excepción prevista en el artículo 13 de la ley 11.683 (v. Considerando  
7°).



**VII.** Siendo ello así, estimo que la sentencia apelada debe ser revocada, ya que el error cometido por el Sr. Venini encuentra reparo en la excepción prevista en el dispositivo legal analizado.

**VIII.** En cuanto a las costas, propicio que sean distribuidas en el orden causado en ambas instancias, en mérito de las particularidades que presentó esta *litis* y en consonancia con lo resuelto por la Sala IV en la causa “*Toledo, Gustavo Damián*”, cit. (arg. arts. 68, segunda parte y 279 del CPCCN).

El Dr. Jorge Eduardo Morán adhiere al voto del vocal preopinante.

En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede el Tribunal **RESUELVE**: Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y revocar la sentencia apelada; en consecuencia, se hace lugar a la demanda y se deja sin efecto la resolución N° 71/12 (DI RPAL). Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado.

Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes mencionados en el sitio web <http://www.cij.gov.ar/>.

A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 2/24 de esta Cámara.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ      JORGE EDUARDO MORAN

